



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado NÉSTOR REGO CANDAMIL formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

Se ha anunciado que el Ministerio de Fomento autoriza una subida de los peajes de la AP-9 a partir del 1 de enero del 2,64%, sumando el incremento del 0,84% en función de la intensidad de tráfico del año precedente; el 1% en relación con las obras de la Ponte de Rande, circunvalación de Santiago y acceso en Sigüeiro, y el 0,8% de compensación por el descuento en el trayecto de vuelta en el tramo Pontevedra-Vigo.

Este será la tercera mayor subida consecutiva de los peajes de la AP-9 en relación con el conjunto de las autopistas del Estado, en una vía que experimentó un incremento de las tarifas superior al 30% en los últimos 10 años. Se trata, además, de una autopista que inició su funcionamiento en 1979 y que prolonga su periodo de concesión hasta el año 2048 por una decisión más que cuestionable del Gobierno español en el año 2004 de prorrogarla 25 años más para compensar la construcción del tramo libre de peaje Fene-Ferrol.

Con las subidas anunciadas, los peajes entre A Coruña y Vigo pasarán a ser para turismos de 16,85€, 0,45€ más que en la actualidad. Y las distancias más largas de la autopista, Ferrol-Tui, pasarán a pagar unos 22,10€, 55 céntimos más que este año. Los grandes vehículos como camiones y autobuses pasarán a pagar una tarifa de 36,35 € entre Vigo y A Coruña, unos 95 céntimos de subida, mientras que el trayecto Ferrol-Tui se situará en 48,35€ por viaje, 1,25€ más que ahora; es decir: un recorrido entre el norte y el sur de Galiza se situará para un vehículo pesado cerca de los 100 euros.

La AP-9 se ha convertido en una vía fundamental para las comunicación en el eje atlántico de Galiza, el área más poblada de nuestro País, donde se encuentran 5 de las 7 principales ciudades gallegas y también la zona que concentra la mayor actividad económica. Siendo así, los abusivos peajes de esta autopista tienen un efecto muy negativo para el bienestar de la población y para el desarrollo económico de Galiza.

Los sectores más afectados son, sin duda, los usuarios habituales -fundamentalmente trabajadores y trabajadoras que se ven obligados a utilizar esta vía por razones laborales-, las empresas -especialmente de transporte- y transportistas autónomos. La carga de los peajes en los costes de producción de las empresas provoca que, en muchos casos, se opte por el uso de vías convencionales, con las consecuencias negativas que esto acarrea para el conjunto de la población, especialmente por el incremento de los riesgos de accidentes.

Además, estamos delante de un agravio comparativo que sufre nuestro País, ya castigado por el déficit en infraestructuras de comunicación modernas, sostenibles y adecuadas a las necesidades del siglo XIX. Observamos como otras autopistas del Estado pasaron a ser gratuitas, o lo harán en breve. Es el caso de la AP-1 (Burgos-Armiñón), o de la AP-4 (Sevilla-Cádiz) y la AP-7 (Tarragona-Valencia) a partir del 1 de enero de 2020. A esto le hay que añadir el reciente rescate de las radiales madrileñas con dinero público y la subsiguiente rebaja de las tarifas.

Otras autopistas finalizarán sus concesiones en el año 2021. A partir de ese momento, Galiza quedará, con 326 km, como como el territorio con más kilómetros de vías de pago en todo el Estado.

Entendemos que esta es una situación insostenible, sobre la que es necesario actuar de forma inmediata. Existe una demanda social unánime en Galiza para acabar con la estafa de los peajes de la AP-9, que se refleja también en la reclamación unánime del Parlamento de Galiza de la transferencia de una vía que previamente debe ser rescatada por el Estado y el la que, como mínimo y de forma inmediata, deben ser aplicadas rebajas y descuentos significativos.

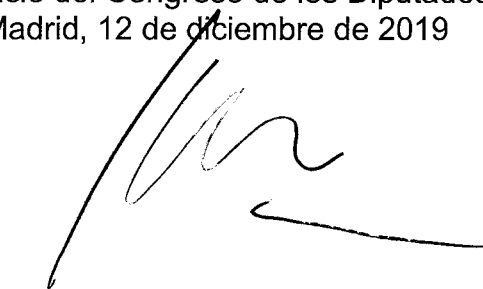
¿Por qué autoriza el gobierno, conociendo la oposición unánime de la sociedad gallega, una nueva subida de los peajes de la AP-9, en vez de buscar una solución que permita actuar en sentido contrario?

¿Tiene el gobierno previsto rescatar la AP-9 para evitar el abuso de unos peajes que benefician exclusivamente a la empresa concesionaria y perjudican a Galiza?

¿Tiene previsto el gobierno, cuando menos, gestionar una rebaja de las tarifas de la AP-9 y establecer descuentos significativos, especialmente para usuarios habituales y transportistas?

¿Tiene previsto el gobierno proceder a la transferencia de la AP-9 a Galiza, tal y como reclaman de forma unánime las fuerzas políticas representadas en el Parlamento galego?

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 12 de diciembre de 2019



NÉSTOR REGO CANDAMIL
Diputado